

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/WGTCP/W/211
24 de septiembre de 2002

(02-5127)

**Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de Competencia**

Original: inglés

COMUNICACIÓN DE AUSTRALIA

Se ha recibido de la Misión Permanente de Australia la siguiente comunicación, de fecha 23 de septiembre de 2002, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.

A. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, CON INCLUSIÓN DE LA TRANSPARENCIA, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA EQUIDAD PROCESAL

Introducción

1. Australia considera que los principios fundamentales de transparencia, no discriminación y equidad procesal son los principales fundamentos necesarios para sostener un régimen de competencia satisfactorio. Sin esos elementos básicos, el régimen de competencia adolecerá probablemente de falta de credibilidad, autoridad y respeto en la comunidad y, por consiguiente, carecerá de efectividad.

2. Para que un régimen de competencia sea efectivo, es imprescindible que se tomen en consideración y se apliquen colectivamente esos tres principios fundamentales -transparencia, no discriminación y equidad procesal- con el fin de desarrollar una estrategia integrada de reglamentación y administración de la competencia abierta, equitativa y coherente.

3. La importancia de esos principios fundamentales queda de manifiesto por el hecho de que se hayan ya abordado en gran medida en una serie de foros distintos.

- Los principios fundamentales de la OMC son: trato nacional, trato de la nación más favorecida y transparencia.
- El conjunto de principios fundamentales del Grupo Conjunto de la OCDE sobre Comercio y Competencia incluye los de transparencia, no discriminación y equidad procesal.
- En 1999 los Ministros de los países del APEC adoptaron los *Principios del APEC para el Fomento de la Competencia y de la Reforma de las Reglamentaciones*, que abarcan la no discriminación, la amplitud, la transparencia y la responsabilidad.

4. Esas cuestiones no son nuevas, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta la necesidad fundamental de respetar esos principios si un país quiere aplicar seriamente un régimen de competencia efectivo. La posibilidad de reforzar esos conceptos a través de la OMC no hará sino fortalecer el mensaje ya existente en los medios de la política de competencia, que es básicamente que

es de esperar que esos principios fundamentales figuren ya en la lista de objetivos de todo país que desee adoptar un régimen de competencia.

5. Otra ventaja de adoptar ese conjunto de principios fundamentales en la OMC es el apoyo que podrían prestar a un organismo encargado de las cuestiones relacionadas con la competencia en sus esfuerzos encaminados al cumplimiento de esos principios. Ocurre con frecuencia que las autoridades que se ocupan de la reglamentación de la competencia sufren presiones de muchos diferentes sectores de la economía -con inclusión de las empresas, los consumidores y el gobierno- que tratan de obtener, por ejemplo, trato especial o exenciones de la legislación. Una vez establecidos esos principios, podrían prestar apoyo adicional a esos organismos para que pudieran cumplir debidamente su cometido sin verse influidos por argumentos “ajenos a la competencia” que a menudo crean obstáculos que impiden a las autoridades encargadas de reglamentar la competencia hacer aquello para lo que fueron investidas.

6. En el presente documento se abordarán con más detalle cada uno de esos principios fundamentales y se examinarán algunas de las medidas adoptadas por Australia para aplicarlos.

1. Transparencia

7. El concepto de transparencia es esencial para lograr que las empresas y los consumidores sepan en qué condiciones legales operan y para facilitar la cooperación entre los gobiernos.

8. Teóricamente, la transparencia debe abarcar todos los aspectos del régimen de competencia de un país, con inclusión de leyes, políticas, estructuras institucionales, procedimientos de adopción de decisiones, prioridades en materia de observancia, directrices sobre políticas y procedimientos, criterios de selección de asuntos, criterios de exención, procesos de apelación, y pormenores de todos los resultados y decisiones adoptadas pertinentes. Por otra parte, si bien lo mejor es reducir al mínimo la existencia de exenciones, excepciones o normas de competencia especiales, cuando las haya, esas exenciones deben ser de conocimiento público y los procedimientos y criterios para otorgarlas deben ser claros y transparentes.

9. Como se prevé en otros acuerdos de la OMC, como el AGCS, un mecanismo de transparencia efectivo debe incluir los siguientes elementos:

- publicación de las leyes pertinentes;
- servicios encargados de atender las solicitudes de información sobre la legislación;
- notificación a la OMC de las modificaciones introducidas en la legislación;
- mecanismos para el examen de las decisiones sobre competencia, cuando se solicite;
- mecanismos para informar a los reclamantes de la situación de un asunto; y
- mecanismos para asegurar la transparencia de los procedimientos, con el fin de que las leyes en materia de competencia se administren de manera razonable, objetiva e imparcial.

10. Por conducto tal vez de un sitio Web amplio, los consumidores y las empresas nacionales podrían disponer de fácil acceso a la información legislativa y a los medios de solicitar información o presentar reclamaciones a un organismo de reglamentación extranjero cuando, por ejemplo, se vieran afectados por conductas anticompetitivas en un mercado extranjero o trataran de realizar una fusión multinacional que requiriera autorización en varias jurisdicciones.

11. Los mecanismos de promoción de la transparencia de los procedimientos facilitarían también información útil y necesaria sobre cómo y dónde presentar reclamaciones, qué procesos tendrían lugar y qué tiempo requeriría la solución de un problema.

1.1. Información del público

12. Es también necesario otorgar amplio acceso del público a la información, si bien teniendo presente, naturalmente, la protección de la información confidencial.

13. El organismo australiano encargado de las cuestiones relacionadas con la competencia, la Comisión Australiana para la Competencia y el Consumo (ACCC), consigue la transparencia mediante una gama de diferentes mecanismos y atribuye gran prioridad a sus estrategias de información, cumplimiento de la normativa y relaciones con los medios de comunicación.

14. Los principales objetivos de las actividades de orientación e información de la ACCC son los siguientes:

- aumentar el conocimiento de los derechos y obligaciones dimanantes de la legislación australiana en materia de competencia: la *Ley de Prácticas Comerciales de 1974* y demás legislación en la que se asignan funciones a la ACCC;
- aumentar la comprensión del público de los procedimientos y políticas de la propia ACCC; y
- contribuir de manera más general al conocimiento público de las cuestiones relativas a la reglamentación de la competencia con miras a facilitar el desarrollo de una cultura de la competencia.

15. La estrategia de cumplimiento de la normativa e información de la ACCC incluye la educación e información del público mediante la utilización de comunicados de los medios de comunicación, entrevistas y artículos de prensa, charlas, publicaciones y directrices, el mantenimiento de un sitio Web amplio y actualizado, y programas efectivos de enlace con todas las partes interesadas.

16. La ACCC despliega una gran actividad en la utilización de todas esas formas de comunicación. Por lo general, publica anualmente bastante más de 300 comunicados de prensa -en 2002 ha publicado ya más de 230, en 2001 publicó 332 y en 2000 371- y tiene un departamento específico encargado de la gestión de su estrategia de relaciones con los medios de comunicación.

17. El Presidente, los miembros y el personal de alto nivel de la ACCC dan unas 150 charlas anuales a una amplia gama de audiencias.

18. La ACCC elabora una amplia serie de publicaciones: por ejemplo, revistas e informes periódicos sobre sus actividades; diversas publicaciones comerciales; numerosas directrices sobre la manera en que administra la Ley de Prácticas Comerciales, por ejemplo directrices sobre fusiones; publicaciones sobre sectores específicos, por ejemplo los de los servicios profesionales de salud y las pequeñas empresas. Actualmente tiene 240 publicaciones.

19. La ACCC mantiene un sitio Web amplio y actualizado cuya dirección es la siguiente: <http://www.accc.gov.au>. Contiene una detallada gama de información que incluye un resumen del cometido y las funciones de la ACCC, enlaces con la legislación que administra, copias de comunicados de prensa y charlas desde 1995, copias electrónicas de la mayoría de las publicaciones de la ACCC, oportunidades de carrera, información sobre cómo ponerse en contacto con la ACCC y

enlaces con otros sitios Web útiles. Contiene asimismo una serie de registros públicos en los que se facilita a la comunidad información detallada sobre la labor que realiza la ACCC y pormenores de sus decisiones. Los registros incluyen detalles de todas las cuestiones sobre fusiones y autorizaciones examinadas por la ACCC, así como de todas las soluciones administrativas alcanzadas.

20. Por otra parte, la mayoría de los departamentos de la ACCC mantiene secciones en el sitio Web en los que se facilita información detallada sobre las actuales prioridades y copias de importantes informes, decisiones y documentos objeto de debate en esferas como las de las pequeñas empresas, las telecomunicaciones, la aviación, los ferrocarriles, el gas, la electricidad, el petróleo y el transporte.

21. Los organismos encargados de las cuestiones relacionadas con la competencia tienen una amplia gama de grupos interesados, todos ellos con necesidades de información muy diferentes. Por consiguiente, es importante que la estrategia de información y cumplimiento de la normativa del organismo sea suficientemente diversa para satisfacer las necesidades de todas esas partes interesadas. Este problema se agrava en Australia por su inmensa diversidad geográfica y cultural.

22. Últimamente la ACCC ha hecho un esfuerzo especial para llegar a los grupos de las pequeñas empresas y a los de las zonas rurales y regionales de Australia. Por ejemplo, el Departamento de las Pequeñas Empresas de la ACCC organiza periódicamente seminarios y reuniones en cada estado y territorio para que las pequeñas empresas tengan conocimiento de sus derechos y obligaciones y estén en condiciones de expresar las preocupaciones que puedan tener. La ACCC celebra también periódicamente “foros sobre competencia leal”, que brindan a los habitantes de las zonas rurales y regionales de Australia la oportunidad de formular preguntas a un grupo de expertos, vía satélite, sobre la competencia y la protección de los consumidores. Hasta la fecha se han celebrado cuatro foros, con participantes de más de 300 centros regionales diferentes.

1.2 Confidencialidad

23. Australia entiende que las disposiciones en materia de transparencia adoptadas en el marco de la OMC no abarcan el suministro de información confidencial. Esto es importante, ya que esta premisa fundamental de transparencia lleva implícita la necesidad de que los organismos encargados de las cuestiones relacionadas con la competencia puedan proteger la información confidencial que les haya sido facilitada durante el curso de sus investigaciones. Si las autoridades competentes no pudieran proteger esa información, ello comprometería gravemente sus posibilidades de obtenerla en primer lugar, lo que a su vez reduciría su capacidad para realizar una investigación completa de los hechos pertinentes. Por consiguiente, Australia considera importante que las decisiones sobre si la información debe revelarse o protegerse dependan exclusivamente de las autoridades nacionales encargadas de las cuestiones relacionadas con la competencia.

2. No discriminación

24. En el contexto de la OMC el principio de no discriminación engloba los principios de trato de la nación más favorecida (NMF) y trato nacional. Entraña de hecho la aplicación de los principios sobre competencia de manera que no se establezcan diferencias entre distintas entidades económicas sobre la base de su nacionalidad.

25. Dada la dificultad de determinar situaciones en las que pueda haberse producido una discriminación, también en este caso conviene subrayar la importancia de la transparencia de las actividades y las decisiones de las autoridades encargadas de las cuestiones relacionadas con la competencia para apoyar y reforzar el principio de no discriminación.

26. El principio de no discriminación plantea la cuestión de si crearía una situación en la que no pudieran tenerse en cuenta determinadas consideraciones de política industrial o sectorial, u otras consideraciones de política social, y no permitiría la aplicación de determinadas políticas industriales.

27. No obstante, en este contexto la no discriminación se refiere al comportamiento y las decisiones de las autoridades encargadas de las cuestiones relacionadas con la competencia, es decir, a que la legislación en materia de competencia se aplique de manera no discriminatoria.

28. Es importante señalar que una política de competencia amplia y que funcione bien puede coexistir con otras políticas gubernamentales. Australia mantiene un enfoque no discriminatorio de la administración de su legislación en materia de competencia. No obstante, con ese enfoque coexisten otras políticas que han permitido al Gobierno atender otras prioridades y otros objetivos, por ejemplo, las restricciones a la propiedad extranjera en los medios de comunicación australianos.

29. La política de competencia no está destinada a impedir el desarrollo del poder de mercado, sino que ha de centrarse en la eliminación del abuso de ese poder. No es un fin en sí misma sino que es el instrumento utilizado para llegar a resultados de mercado competitivos y lograr que los beneficios de la liberalización del comercio alcancen a los consumidores.

2.1 Autorización

30. Por otra parte, el mantenimiento de un sistema de no discriminación no significa que no haya posibilidades de otorgar excepciones de la legislación. Siempre que un régimen nacional se administre de manera razonable, transparente, objetiva e imparcial, podrá existir en el marco de la OMC. Australia tiene un régimen de competencia no discriminatorio pero tiene también la facultad de otorgar exenciones de la Ley de Prácticas Comerciales con arreglo a su proceso de “autorización”.

31. En virtud de las disposiciones en materia de autorización de la Ley de Prácticas Comerciales, la ACCC tiene la facultad de otorgar inmunidad con respecto a los procedimientos legales en el caso de algunos acuerdos o comportamientos, que en otro caso podrían infringir las disposiciones en materia de prácticas anticompetitivas de la Ley de Prácticas Comerciales, cuando los beneficios públicos de esos comportamientos superen los efectos anticompetitivos que puedan tener. Aunque el concepto de “beneficio público” no está definido jurídicamente en Australia, incluye factores como los siguientes: aumento de la eficiencia de las empresas o la industria, una asignación más eficiente de los recursos, crecimiento del empleo, mejora de la competitividad internacional, armonía industrial, mayor seguridad y mejor calidad de los productos, y prestación de asistencia a pequeñas empresas eficientes.

32. El proceso de autorización se rige estrictamente por la Ley de Prácticas Comerciales y existen normas claras para el mantenimiento de un proceso de examen de las solicitudes de autorización público en alto grado y transparente. Por consiguiente, aunque determinados tipos de comportamiento puedan obtener una exención de la aplicación de la legislación, los criterios y el proceso para examinar y otorgar las exenciones son claros y de dominio público. La ACCC está obligada a mantener un registro público de todos los documentos relacionados con cada decisión de autorización, a reserva de la protección de la información sensible desde un punto de vista comercial y demás información confidencial. Durante el examen de una solicitud de autorización todas las partes interesadas pueden dirigir comunicaciones a la ACCC. Salvo en el caso de fusiones, la ACCC debe publicar un proyecto de decisión sobre la cuestión y, antes de adoptar su decisión final, debe brindar la oportunidad de que se celebre una conferencia de las partes interesadas. Las decisiones de autorización adoptadas por la ACCC están también sujetas a examen, si se solicita, por el Tribunal Australiano de la Competencia, organismo de apelación independiente establecido por ley.

2.2 *Exenciones de la legislación en materia de competencia*

33. La legislación australiana en materia de competencia permite también exenciones legisladas de las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales. No obstante, cuando una exención puede tener el efecto de restringir la competencia, debe demostrarse que esa restricción es de interés público. Estas prescripciones están en conformidad con un acuerdo de los gobiernos del Commonwealth y de los Estados y Territorios de Australia de no establecer legislación que restrinja la competencia a menos que sea de interés público.

34. El amplio marco de política de competencia de Australia incluye también un compromiso de examinar la legislación en vigor que restrinja la competencia para asegurarse de que esas restricciones son de interés público.

2.3 *Cooperación en materia de observancia*

35. Un aspecto que merece mención aparte es el de la cooperación en materia de observancia entre las autoridades encargadas de las cuestiones relacionadas con la competencia. Se plantea la cuestión de si la adopción de un principio de no discriminación en el contexto de la política de competencia en la OMC crearía una situación en la que un organismo encargado de las cuestiones relacionadas con la competencia que prestara asistencia a otro organismo en el marco de un acuerdo bilateral formal estaría obligado a prestar asistencia o cooperación a todos los demás Miembros de la OMC en las mismas condiciones. En opinión de Australia, no deberían crearse esas obligaciones en el marco de política de competencia que pueda establecerse en la OMC. Aun cuando los compromisos en materia de cooperación en el marco de la OMC serían probablemente voluntarios, es necesario dejar claro ese aspecto. Aunque es probable que fuera conveniente y apropiado establecer en el marco de la OMC un sistema de cooperación voluntaria basado en un conjunto de principios generales, los distintos organismos necesitan conservar sus facultades discrecionales con respecto a los detalles de sus relaciones individuales con otros organismos y tener facultades discrecionales exclusivas de decidir qué información deben compartir y con quién, independientemente de que esas relaciones estén o no formalizadas mediante acuerdos bilaterales.

36. Las relaciones entre las autoridades encargadas de la reglamentación de la competencia varían considerablemente y se basan en la comprensión mutua de sus leyes y políticas y en la existencia de confianza y marcos para el intercambio y utilización de información. Es necesario que haya facultades discrecionales y flexibilidad para que los Miembros aborden estas cuestiones caso por caso.

3. *Equidad procesal*

37. Con respecto al logro de equidad procesal, hay una serie de factores dignos de mención: transparencia (de la que ya se ha tratado), garantías procesales, responsabilidad, previsibilidad e independencia.

3.1 *Garantías procesales*

38. Para lograr garantías procesales, es importante que se dé a las partes, de manera no discriminatoria, acceso efectivo a los recursos judiciales y/o administrativos nacionales en el momento oportuno. Australia apoya la siguiente lista de factores elaborada por el Grupo Conjunto de la OCDE sobre Comercio y Competencia, por considerarla esencial para lograr equidad procesal.

- Derecho de los reclamantes a solicitar a las autoridades encargadas de las cuestiones relacionadas con la competencia que adopten medidas y a pedir explicaciones por no haberlo hecho en casos concretos.

- Derecho de los reclamantes a presentar sus reclamaciones ante las autoridades encargadas de las cuestiones relacionadas con la competencia.
- Derecho de las partes privadas a acceder directamente al sistema judicial y tratar de obtener reparación por el daño sufrido a causa de prácticas anticompetitivas.
- Garantías procesales para todas las partes en procedimientos administrativos o judiciales, con inclusión de la protección de la información confidencial.
- Cuando las autoridades encargadas de las cuestiones relacionadas con la competencia adopten decisiones dispositivas en casos concretos, publicación/explicación de esas decisiones por dichas autoridades.
- Acceso apropiado a vías de apelación.

3.2 *Responsabilidad*

39. Para que las autoridades encargadas de las cuestiones relacionadas con la competencia logren credibilidad y confianza, uno de los elementos necesarios es el establecimiento de un marco claro y concreto para la aplicación y administración de las leyes y políticas en materia de competencia. A menos que se establezca un marco que haga responsables a dichas autoridades de sus decisiones, ni las empresas ni los consumidores tendrán confianza en que protejan independiente y apropiadamente sus intereses de comportamientos anticompetitivos. Por consiguiente, es evidente que para un organismo es de interés primordial ser independiente y mantener un enfoque transparente, abierto y responsable de sus operaciones cotidianas.

3.3 *Previsibilidad*

40. La previsibilidad es esencial para que las empresas y los consumidores confíen en que las autoridades de reglamentación adoptarán criterios y plazos coherentes y bien definidos para la adopción de decisiones. Es asimismo necesaria para que las entidades reciban un trato coherente en distintos momentos y en distintas jurisdicciones. Los organismos encargados de las cuestiones relacionadas con la competencia pueden promover una mayor previsibilidad informando a las partes interesadas de su jurisdicción del cometido y las funciones de las autoridades de reglamentación, facilitándoles información detallada sobre sus procedimientos y plazos para la adopción de decisiones, y publicando los resultados y exponiendo las razones de sus decisiones.

3.4 *Independencia*

41. Este punto está vinculado con varios otros de los que ya se ha tratado, especialmente el de la transparencia. Es importante que el organismo encargado de las cuestiones relacionadas con la competencia sea funcional y operativamente independiente del gobierno, aunque es probable que esté financiado con fondos públicos. Si no se consigue esa independencia, tanto de hecho como en apariencia ante la comunidad, el organismo pertinente se verá o parecerá verse influido por la política del gobierno en el poder y, por consiguiente, sujeto a otros programas políticos. Esa situación no tiene necesariamente que ser la mejor para la competencia y el logro de resultados de mercado competitivos.

42. Sin independencia, el organismo carecerá tal vez de credibilidad y la comunidad no tendrá el grado necesario de confianza en que su reclamación o problema se atienda de manera equitativa y razonable. Sin este elemento de confianza, el resultado puede ser un público escéptico y unas autoridades de reglamentación inefectivas.

Conclusión

43. Los tres principios fundamentales de transparencia, no discriminación y equidad procesal son factores clave que influyen en el desarrollo de estructuras efectivas de reglamentación de la competencia; si se descuida alguno de ellos, el resultado puede muy bien ser un régimen de competencia que carezca de sustancia y aceptación pública o que sea demasiado difícil o imposible de aplicar.

B. ASISTENCIA TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD

44. A continuación se ofrece un breve resumen de las más recientes actividades de asistencia técnica y creación de capacidad de la ACCC en la esfera de las leyes y políticas en materia de competencia.

- En abril de 2002 la ACCC participó en un seminario regional de la UNCTAD sobre política de competencia y negociaciones multilaterales. El seminario, celebrado en Hong Kong, se centró en los resultados de la ronda de Doha de la OMC, especialmente para los países que asistieron al seminario, procedentes en gran parte de la región de Asia y el Pacífico.
- La ACCC participó en un acto sobre política de competencia organizado por la OCDE, conjuntamente con las autoridades sudafricanas, que tuvo lugar en Pretoria en junio de 2002. La conferencia sobre promoción de la competencia en la esfera de las telecomunicaciones y los puertos marítimos estaba destinada al personal de la Comisión Sudafricana de la Competencia y otros funcionarios de países de la Comunidad de Desarrollo para el África Meridional (SADC).
- En mayo y agosto de 2002 la ACCC impartió en Australia dos cursos de investigación a los que asistieron funcionarios del Consejo de Consumidores de Hong Kong y el Consejo de Consumidores de Macao.
- En septiembre de 2002 la ACCC participó en un taller patrocinado por la UNCTAD, que se celebró en Halong Bay y Hanoi, para examinar un proyecto de ley sobre competencia del Viet Nam y establecer modalidades para su aplicación.

C. OTROS ASUNTOS, CON INCLUSIÓN DE UN BALANCE DE LAS EXPERIENCIAS Y LEGISLACIÓN NACIONALES

45. El 15 de octubre de 2001 el Primer Ministro anunció que se realizaría un examen independiente de las disposiciones sobre la competencia de la legislación australiana en la materia, la *Ley de Prácticas Comerciales de 1974*, y su administración.

46. Al establecer el mandato para el examen, el Gobierno manifestó que, en vista de los importantes cambios estructurales y normativos que estaban teniendo lugar en Australia que repercutían en la competitividad de las empresas australianas y el desarrollo económico y afectaban a los intereses de los consumidores, era oportuno examinar algunas disposiciones fundamentales de la *Ley de Prácticas Comerciales*.

47. Al establecer el examen, el Gobierno hizo referencia a los siguientes hechos:

- las empresas australianas se enfrentan cada vez más con la competencia global y la necesidad de poder competir a nivel nacional e internacional;

- las empresas pueden utilizar la excesiva concentración del mercado y el poder de mercado para perjudicar a sus competidores; y
- las empresas necesitan tener una seguridad razonable con respecto a los requisitos necesarios para estar en conformidad con la Ley de Prácticas Comerciales u obtener autorizaciones en su marco.

48. El Comité de Examen ha recibido instrucciones específicas de examinar el funcionamiento de las disposiciones en materia de competencia, autorización y sanciones conexas de la Ley de Prácticas Comerciales para determinar si:

- obstaculizan indebidamente la capacidad de la industria australiana para competir a nivel nacional e internacional;
- establecen un equilibrio apropiado de poder entre las empresas competidoras, en particular las que compiten o tratan con empresas que tienen mayor concentración del mercado o poder de mercado;
- promueven un comercio competitivo que beneficie a los consumidores en lo que se refiere a servicios y precios;
- otorgan protección adecuada a las actividades comerciales y la reputación de las personas físicas y jurídicas;
- permiten a las empresas ejercer y cumplir fácilmente sus derechos y obligaciones en el marco de la Ley de Prácticas Comerciales, de conformidad con los principios de seguridad, transparencia y responsabilidad, y utilizar los procesos de cumplimiento de la normativa o autorización aplicables a sus circunstancias; y
- son flexibles y responden a las necesidades transitorias de industrias que experimentan cambios estructurales y/o normativos, o de comunidades afectadas por esos cambios, y a las necesidades de las zonas rurales y regionales.

49. El Comité debe informar al Gobierno para finales de noviembre de 2002. Puede obtenerse más información sobre el examen, con inclusión de copias de todas las comunicaciones públicas, en el sitio Web sobre el examen: <http://tpareview.treasury.gov.au>.
